

la, en 23 de Octubre próximo pasado, la órden siguiente:

"Excmo. Sr.—El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Director general de Infantería lo siguiente:—En vista del oficio de V. E. fecha 16 de Setiembre último, en el que participa á este Ministerio, haber dispuesto la baja del Teniente del Batallón de Cazadores Cataluña núm. 1.º, Don Antonio Luna y Gomez, el cual ha desaparecido de la ciudad de Toledo, en cuya escuela de tiro se encontraba, desertando á Portugal; el Regente del Reino ha tenido por conveniente aprobar la referida disposición, resolviendo en su consecuencia que el mencionado Oficial sea baja definitiva en el Ejército, publicándose en la órden general del mismo, con arreglo á la Circular de 19 de Enero de 1850, y dándose conocimiento de esta disposición á los Directores é Inspectores generales de las armas é institutos, Capitanes generales de los Distritos y Sres. Ministros de la Gobernación y Ultramar, para que llegando á conocimiento de las Autoridades Civiles y Militares, no pueda aparecer en punto alguno con un carácter que ha perdido con arreglo á ordenanza y órdenes vigentes. De órden de dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes."

De órden de S. E., se inserta en la general de este día, para la debida publicidad y fines expresados.—El Coronel Gefé de E. M., Francisco Sanchez.

Seccion 1.ª—Negociado 2.ª—Núm. 68.

ADICION A LA ORDEN GENERAL DE HOY 7 DE DICIEMBRE DE 1869 EN PUERTO-RICO.

Por el Ministerio de la Guerra, se comunica al Excmo. Sr. Capitan General de esta Isla, en 18 de Octubre próximo pasado, la órden siguiente:

"Excmo. Sr.—El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Director general de Administracion Militar, lo siguiente:—Enterado el Regente del Reino, del escrito de V. E. de dos del actual, dando cuenta de haber ordenado sea dado de baja definitiva en el Cuerpo Administrativo de su cargo, el Oficial 3.ª de reemplazo Don Enrique Navarro y Lopez, por no haberse presentado en el acto de la revista al Comisario de Guerra encargado de la misma, ni tampoco lo habia verificado el mes anterior, ignorándose además su paradero; S. A. ha tenido á bien aprobar su baja y manda que se publique en la órden general del Ejército, conforme á lo mandado en Real órden de 19 de Enero de 1850, y dándose conocimiento de esta disposición á los Directores é Inspectores generales de las armas é institutos, Capitanes generales de los Distritos y al Sr. Ministro de la Gobernación, para que llegando á conocimiento de las Autoridades Civiles y Militares, no pueda el interesado aparecer en punto alguno con un carácter que ha perdido con arreglo á ordenanza y órdenes vigentes. De órden de dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes."

De órden de S. E., se inserta en la general de este día para la debida publicacion y fines expresados.—El Coronel Gefé de E. M., Francisco Sanchez.

SECRETARIA

DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE PUERTO-RICO.

Circular número 64.

En el expediente formado en esta Superioridad, con dos oficios del Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil, acerca de los obstáculos que encuentra la Hacienda pública para el cobro de contribuciones que adeudan los bienes de concursados, y otros que se hallan bajo la accion de los tribunales, el Tribunal pleno se ha servido dictar el acuerdo siguiente:—Puerto-Rico primero de Diciembre de mil ochocientos sesenta y nueve.—Como parece al Sr. Fiscal.—Rubricado de los Sres. Regente interino, Lopez Bustamante, Fiscal Vida, Presidente de Sala, Sanchez de Fuentes, Magistrados Primo de Rivera, Peray, Aguilar.—Ricardo de Mendoza.—Y el dictamen del Sr. Fiscal, es como sigue:—Excmo. Sr.—El Fiscal se ha enterado de las dos comunicaciones que preceden del Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil de esta Isla, y de las copias que acompaña, relativas unas

y otras á los obstáculos que suele encontrar la administracion ó la Hacienda Pública, en algunos juzgados de primera instancia, cuando se trata del cobro de los impuestos y contribuciones respecto á bienes que se hallan bajo la accion de los Tribunales; creyendo el Fiscal atendible lo que dicha Autoridad Superior manifiesta acerca de este asunto. En varias leyes de la Novísima Recopilacion, y mas terminantemente en la sétima, título diez, libro cuarto del mismo Código, se previene que los Intendentes, por lo respectivo al ejercicio de la jurisdiccion contenciosa en las dependencias de rentas, deberán conocer privativamente, y con inhibicion de los Tribunales ú otras autoridades, de todas las causas en que tuviere algun interés la Real Hacienda, así en lo tocante á cualesquiera ramos de las propias rentas ó productos generales ó particulares del Erario, como respecto á su cobranza, y en todas las incidencias, anexidades y conexidades de esa clase de negocios; y en el artículo octavo de la ley de veinte de Febrero de mil ochocientos cincuenta, dictada para la Península, pero hecha extensiva en cuanto á ese y otros artículos, á las provincias de Ultramar por Real Decreto de dos de Junio de mil ochocientos cincuenta y uno se dispone que "los procedimientos para la cobranza de créditos definitivamente liquidados, á favor de la Hacienda, serán puramente administrativos; sin que puedan hacerse estos asuntos contenciosos mientras no se realice el pago ó consignacion de lo liquidado, en las Cajas del Tesoro público. Con forme á esos soberanos preceptos, la jurisdiccion de Hacienda puede ejercerse, pues, en dos distintas vias, la puramente administrativa, ó la contenciosa, segun verse la cuestion sobre créditos liquidados, y no pagados ó sobre los demás casos ó negocios que se indican en aquellas disposiciones. Esta jurisdiccion contenciosa, ó mejor dicho, los asuntos contenciosos en que tenga interés la Hacienda, podrán ser *contencioso-judiciales*, y hoy se conocerá de ellos por los Tribunales ordinarios, con arreglo á lo prevenido recientemente sobre supresion del Juzgado de Hacienda y sobre refundicion de fueros especiales en el ordinario; ó podrán ser tambien en ciertos casos, *contencioso-administrativos*, y entonces conocerán de ellos en primera instancia las Audiencias y en segunda, el Tribunal Supremo de Justicia, así como antes conocian los Consejos de Administracion y el Consejo de Estado. Que solo debamos contraernos; que solo se trata aquí de la jurisdiccion ó del procedimiento puramente administrativo; demás está decir, porque se trata del pago de las contribuciones, y no puede haber negocio ninguno ni crédito liquidado de la Hacienda que tanto exija, y haya exigido siempre ese procedimiento como el cobro de los impuestos; atendidas las múltiples y urgentes obligaciones del Estado que con ellas principalmente se satisfacen; y así, á la Administracion económica correspondirá exclusivamente entender de su cobranza, dirigiendo al efecto su accion y sus apremios, si fueren necesarios, á donde quiera y como quiera que se encuentren los bienes del deudor responsable ó que se hallen afectos al pago de dichas contribuciones.—Y esto, lo mismo es aplicable á las contribuciones del Estado, que á los impuestos municipales, segun se declara en Real órden de veinte y nueve de Febrero de mil ochocientos sesenta, y lo mismo tiene que suceder respecto á bienes libres de la accion de la Justicia, como respecto á bienes que estén bajo la jurisdiccion de los Tribunales, por cualquiera causa que sea, porque la Ley ni hace ni podia hacer diferencia. En estos casos y en rigurosos términos de derecho, los Jueces tan luego como fueren interpelados por la autoridad económico-administrativa, dándose por inhibidos de entender del cobro de las contribuciones ó impuestos que se reclamen, deben dejar á disposicion de la expresada autoridad, todos los bienes responsables al pago, ó la parte de ellos que fuese mejor y suficiente para el solo fin de que la Hacienda efectúe el cobro ó descubierta; devolviendo á la Justicia el sobrante que pudiere resultar, pero sin ninguna clase de consideraciones por dichos Tribunales, ni porque los bienes estén *proindivisos* ó concursados; ni por que esté coartada la libre administracion de los mismos bienes por sus dueños; ni por que las cuotas que se reclamen sean del año corriente ó de uno ó de varios años atrasados; ni, en fin por otro motivo de ninguna especie. Los Tribunales, en semejantes casos y para los efectos indicados no tienen ni pueden tener nada que ver con los bienes que se

encuentren sometidos á su jurisdiccion ó conocimiento siendo por otra parte indudable que el Fisco; ha tenido siempre el derecho de hipoteca tácita sobre cualesquiera bienes sujetos al pago de los impuestos, con preferencia á todo género de acreedores por privilegiados que sean, y estando ya reconocido y sancionado ese derecho en el Fuero Real y en las Partidas: [Ley sexta, título veinte, libro tercero, Fuero Real y Ley veinte y cinco, título trece, Partida quinta.]—Hemos dicho que en términos rigurosos los Tribunales deben en esas ocasiones inhibirse y dejar los bienes á disposicion de la Autoridad administrativa ó económica. Pero á veces sucede que, ya por consistir los bienes en metálico ó haber dinero, en depósito, de sus rentas ó productos, ya por ser fácil la venta de aquellos, ó de la parte necesaria, la administracion se limita á pedir á los Jueces que desde luego se la pague lo que se la adeuda; y entonces cuando eso sea fácil y de breve ejecucion, á la verdad que á todos interesa que así se haga, aunque no sea mas que en ahorro de las mayores dilaciones y gastos, y de los inconvenientes que tiene que producir eso de que los bienes vayan y vengan, para venderse del poder de la Justicia á manos de la administracion & &, sin que entonces pueda decirse que los Tribunales se entrometan en lo que no le corresponde sino mas bien que obran por delegacion y en auxilio de la Autoridad administrativa. Por no haberse fijado en las disposiciones y los principios de que venimos de hacer mérito, y que son los que generalmente se han practicado en esta provincia, por no hacer la debida distincion entre lo que es de la esfera meramente administrativa ó económico-administrativa, y lo que lo es de la competencia judicial, es sin duda por lo que algunos jueces y en particular los de Ponce y Arecibo, que son á los que ahora se refieren el Sr. Gobernador Superior y los Alcaldes de Juana Diaz y Morovis en las comunicaciones que preceden, han ofrecido los obstáculos que se expresan para que la Hacienda ó los fondos municipales realicen lo que se les estaba adeudando, por contribuciones ó impuestos, de que debian responder ciertos bienes de testamentarías ó concursos que radicaban en sus Juzgados. En lugar de decretar el pago inmediatamente, si habia fondos ó bienes de fácil realizacion, ó de lo contrario, dejar estos á disposicion de la autoridad administrativa, para que ella los vendiese y se cobrase; se han reducido á contestar que los bienes ó fincas se habian rematado, á plazos, y aun no habian vendido ninguno, ni el comprador se prestaba á adelantarlos; que los bienes se hallaban *proindivisos* ó concursados; que estaban pendientes de sentencia, de graduacion y otras contestaciones parecidas: como si nada de esto pudiera importar, ni impedir, á la accion administrativa, el ejercicio de su privilegiado derecho. No aparece que en esos casos se haya requerido formalmente de inhibicion á los jueces, así como tampoco, puede decirse, que en absoluto ellos se negaran á las pretensiones de la Administracion; pero los jueces, aun sin requerimiento, y en todo negocio en que vean que tiene interés, ó puede experimentar algun daño, el Tesoro público, deben, conforme á lo prevenido en Reales órdenes de veinte y cinco de Marzo de mil ochocientos cuarenta y cuatro, y diez de Julio de mil ochocientos cincuenta dictadas para las Provincias de Ultramar, dar conocimiento de ello á la Intendencia, con el oportuno testimonio para los efectos consiguientes que no pueden ser otros sino los de que la Hacienda y ella sola conozca y determine, y mas tratándose de materia puramente administrativa, lo que estime mas conveniente á sus intereses. En virtud de todo lo expuesto y á fin de que en lo sucesivo se eviten al Tesoro público y á los fondos municipales los obstáculos y los perjuicios á que alude el Señor Gobernador Superior Civil; el Fiscal somete á la consideracion de V. E. las siguientes reglas:—1.ª En todo negocio judicial, bien sea de testamentaria, intestado, concurso, ó de cualquiera otra clase, en que aparezca adeudarse á la Hacienda ó á los fondos ú arbitrios municipales, algun crédito definitivamente liquidado, y por razon de contribuciones ó impuestos los Jueces ó Tribunales se abstendrán de conocer ó de hacer tambien objeto del juicio ó procedimiento, la cantidad ó crédito referido, poniéndolo, con el testimonio ó certificacion oportuna en noticia de la Intendencia ó de la Autoridad que corresponda.—2.ª Siempre que la Autoridad económica ó administrativa requiera á los Jueces ó Tribu-

nales para que los bienes que puedan ser objeto de un juicio ó procedimiento de que ellos conozcan y que á la vez se hayan afectados al pago de créditos definitivamente liquidados, y por causa de contribuciones ó impuestos, se entreguen en todo ó en la parte necesaria á las mismas Autoridades á fin de ejecutarlos, y cobrarse los créditos referidos; los Jueces ó Tribunales deberán poner dichos bienes, ó la parte necesaria á disposicion de aquellas Autoridades, con el objeto expresado, si en el *perentorio término de diez dias no se acredita en los autos*, por quien corresponda, y con la oportuna carta de pago, haberse satisfecho el importe de la cuota ó cuotas que se reclamen.

—3.ª Cuando dichas Autoridades se limitaren á solicitar que se disponga lo conducente á que se abone el importe de los descubiertos que resulten, y si el Juez ó Tribunal consideran que bien por prestarse desde luego al pago los interesados, por consistir los bienes ó sus productos en metálico, ó por ser estos de fácil venta y pronta realizacion, se podrá satisfacer el importe de las cuotas reclamadas, dentro del preciso término de treinta dias, el Juez ó Tribunal ordenará que así se haga, y se proceda á lo que fuere consiguiente. Si consideran que no puedan realizarse los bienes, ni hacerse el pago ó consignacion, dentro de dichos treinta dias, pondrán los bienes á disposicion de aquella de las Autoridades referidas que compete con el objeto mencionado en la regla segunda.—4.ª Las diligencias que se practiquen en virtud de lo que en estas reglas se prescribe, formarán ramo separado; no impedirán para nada el curso del juicio ó negocio principal de que dimanen; serán de carácter puramente gubernativo judicial y en ellas no se admitirán escritos, ni se dará Audiencia sino al Ministerio Fiscal, en caso necesario.—5.ª Cualquiera contestacion que dieren los interesados particulares á las notificaciones que fuese preciso hacerles ó cualquiera manifestacion pertinente que se les ofreciese se hará constar por diligencia. Toda reclamacion que intentasen los mismos interesados, respecto al pago de la contribucion ó impuesto de que se trata, ó venta de los bienes con que haya de satisfacerse, será del exclusivo conocimiento de la Autoridad económica ó administrativa.—Como se vé, estas reglas en nada alteran ó modifican las disposiciones aquí vigentes, sino todo lo contrario: y si merecen la aceptacion de V. E., el infrascripto es de parecer de que desde luego se prevenga su observancia, particularmente á los Alcaldes Mayores de Ponce y Arecibo, y como medida general á todos los demas Alcaldes Mayores y Jueces de Paz de este territorio; publicándose y circulándose á los mismos por medio de la Gaceta, y remitiéndose copia certificada del acuerdo de V. E. al Sr. Gobernador Superior Civil, como contestacion á sus dos comunicaciones de fecha de Octubre último.—V. E. resolverá lo que mejor estime.

Puerto-Rico 20 de Noviembre de 1869.—Vida.

Lo que comunico á V. S. S. para su observancia, en cumplimiento de lo acordado.

Dios guarde á V. S. S. muchos años. Puerto-Rico 10 de Diciembre de 1869.—Ricardo de Mendoza.

Sres. Alcaldes Mayores y Jueces de Paz de este Territorio.

ADMINISTRACION CENTRAL

DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS

DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

No habiéndose recibido de la Península hasta esta fecha, las especies timbradas para su circulacion y espendio en esta Isla en todo el año de 1870; el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil en su acuerdo fecha 1.º del actual se ha servido disponer:

1.º La habilitacion del papel sellado necesario para el consumo, interin llegan las referidas especies y

2.º Declarar válidas en el próximo año de 1870, todas las demás clases, como sellos judiciales de franqueo para la correspondencia pública, para cédula de esclavos, papel de multas, de reintegros, documentos de giro, sellos de policía y de títulos, en razon á que las tres primeras clases que tienen época de validez, ocupan un diámetro tan reducido que no seria posible estampar en ellas inscripcion alguna de habilitacion mientras que las cinco clases subsiguientes no tienen época fija de duracion.

Lo que se publica para conocimiento general.

Puerto-Rico Diciembre de 1869.—El Administrador Central, Manuel Rodriguez.